



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Eliana Andrea Upegui Chica
DEMANDADO	Bancolombia S.A.
RADICADO	05-001-31-05-012-2021-00403-01
TEMA	Decreto de prueba
DECISIÓN	Confirma el auto recurrido

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **086** de discusión de proyectos, dentro del proceso ordinario promovido por **ELIANA ANDREA UPEGUI CHICA** contra **BANCOLOMBIA S.A.**, con radicado 05-001-31-05-012-2021-00403-01, procede a dictar auto interlocutorio de segunda instancia.

• **AUTO RECURRIDO:**

En audiencia celebrada el 20 de febrero de 2023, el Juzgado Decimosegundo Laboral del Circuito de Medellín resolvió “*No se decreta dado que no son documentos de los que deba tener en su poder la demandada al tratarse de certificaciones que pretenden se expidan, debió solicitarlos mediante el derecho de petición, sin embargo no obra prueba siquiera sumaria de ello, conforme lo dispone el inciso 2° del art. 173 del CGP: “El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.”*”

• **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por la demandante, quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos: *“Que en los numerales 3 y 4 se hablan de unas certificaciones laborales que contienen los conceptos devengados por un trabajador beneficiario de la convención y eso claramente es una certificación que debe expedir el área de gestión humana, nómina; igual situación se presenta con las funciones asignadas a la demandante en su cargo. En relación con las dos primeras, es decir, la “Certificación en la cual conste el número de trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo directo con Bancolombia S. A. al primero de enero de 2017 y al primero de julio de 2017”; así como la “Certificación en la cual conste el número de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo al primero de enero de 2017 y al primero de julio de 2017.” Nosotros planteamos esta solicitud incluyéndola dentro de las pruebas con el propósito de llevarle certeza al despacho sobre la verdad que se debe mostrar en este proceso. Excluir tales pruebas significaría dejar de lado una información necesaria frente al mismo litigio que acaba de fijar el despacho en temas sobre derechos fundamentales como es el derecho de asociación sindical, derecho a la negociación colectiva, en fin. En este aspecto quiero llamar la atención del despacho para que reconsidere su decisión frente a lo manifestado por las razones anteriores, así como por lo consignado en reciente decisión que expidió el Tribunal Superior de Medellín en un caso de similares contornos, en reciente fallo del 16 de febrero de 2023, en un proceso también contra Bancolombia relacionado con las pretensiones similares. Que el tribunal consideró que algunos de los temas no debían incluirse como pruebas relacionadas en el artículo 31 finalmente consideró que las pruebas eran pertinentes y conducentes y que eran necesarias para resolver el litigio. En el proceso con radicación 05001310501520200007401”*

- **ALEGATOS:**

Demandante: *“Frente a lo argumentado por el Despacho de primera instancia en el auto recurrido, consideramos respetuosamente que al negar la práctica de las pruebas solicitadas en la demanda sustentadas en el artículo 31 del CPL y SS, omitió el deber jurídico de alcanzar la verdad, dada la pertinencia y conducencia de las mismas, por cuanto, guardan estrecha relación con las pretensiones incoadas. Ahora bien, se acepta que la solicitud de práctica de pruebas en poder de la demandada, no se formuló de manera correcta, no obstante, el sentido de la petición es clara y persigue llevarle al Operador Judicial los elementos de convicción que permitan arribar a una decisión justa. Para ello, el Despacho cuenta con plenas facultades para interpretar el contenido de la demanda a fin de darle la dirección correcta”. Finalizó haciendo alusión a la sentencia del 16 de febrero de 2023, radicación 05001-31-05-015-2020-00074-01, proferida por la Sala Laboral de este Tribunal.*

Bancolombia S.A.: *“Remitiéndome a lo expuesto en el capítulo de pruebas, oposición a estas, es el juez director del proceso, quien determina la legalidad del medio de prueba y con ello la conducencia y pertinencia en el proceso para decidir la titularidad del derecho. (artículos 51 y 53 del C.P.T y S.S.) La innovación de la ley 712 de 2001 artículo 18 parágrafo 1º numeral*

2º, es el aporte de aquellas documentos que desde la norma sustantiva, son tenencia del demandado, esto desde los artículos 60 del código de comercio y 264 del C.S.T. pero no es para que desde una interpretación de esta norma se certifiquen situaciones, agregando que frente a las personas de derecho privado, por certificación no se produce la confesión. El aporte de documentos que por mandato de la norma sustantiva, son tenencia del demandado, es diferente a certificados o informes de los artículos 275 a 277 del C.G.P., para lo cual el peticionario de este medio de prueba, debe probar de forma sumaria que no lo obtuvo en ejercicio del derecho de petición artículo 173 del C.G.P. Desde la vigencia del Código General del Proceso, los artículos 275 a 277, regulan la prueba de informe, antes denominado oficios o certificaciones, los que decreta el Juez cuando la parte demuestre que al ejercer el derecho de petición no los obtuvo (Artículo 173 del C.G.P), así es como el certificado de lo pagado se respondió en el derecho de petición de fecha mayo 02 de 2017, cumple la finalidad de obtener información de pagos, la afirmación sobre el hecho de si un pago constituye o no salario, es un hecho afirmativo que corresponde demostrarlo al demandante.”

CONSIDERACIONES:

Aspira la demandante se decrete como prueba, entre otras, con fundamento en el numeral 2º del Parágrafo 1º del artículo 31 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que la demandada debe aportar: “1. Certificación en la cual conste el número de trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo directo con Bancolombia S. A. al primero de enero de 2017 y al primero de julio de 2017; 2. Certificación en la cual conste el número de trabajadores beneficiarios de la convención colectiva de trabajo al primero de enero de 2017 y al primero de julio de 2017; 3. Certificación laboral expedida por el jefe de nómina de Bancolombia S.A., en la cual conste los factores salariales que toma el Banco para liquidar las cesantías, primas semestrales legales y extralegales y las vacaciones legales y extralegales de un trabajador beneficiario de la convención colectiva de trabajo; 4. Certificación laboral en la cual conste las funciones asignadas a la Demandante para el cargo de Ejecutiva Senior de la Gerencia de Gerenciamiento Centralizado, con la firma de recibido de la Actora”; el juzgado del conocimiento negó el decreto de dicha prueba amparándose en el inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso.

Conforme con lo anterior, el problema jurídico para resolver se centrará en determinar si es procedente o no el decreto de las pruebas solicitadas por la demandada y mencionadas anteriormente.

Para resolver el problema planteado se debe partir de que la procedencia de una prueba está determinada por la posibilidad de que su práctica esté admitida legalmente (conducencia), tenga capacidad de lograr el efecto que se espera (pertinencia) y sea útil para el proceso (utilidad).

La demandante aportó una gran cantidad de documentos, los cuales fueron decretados como prueba por el juzgado de instancia; sin embargo, solicitó como prueba en poder de la demandada las certificaciones señaladas anteriormente.

Esta Sala comparte la decisión de la a quo de negar el decreto de la prueba, toda vez que, a la luz de lo consagrado en el artículo 173 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral de conformidad con la remisión normativa de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, *“El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”*

En el presente asunto, es evidente que la misma accionante tuvo la oportunidad de solicitar dicha prueba a través de su derecho constitucional de petición; sin embargo, no aportó prueba alguna que acreditara que elevó tal solicitud y que le hubiese sido negada. Además, tampoco puede pretender la recurrente apelar a la protección de sus derechos fundamentales para corregir la omisión en que incurrió para recopilar la prueba que pretendía hacer valer en juicio, pues el citado artículo es claro al señalar la obligación del juez en esta clase de eventos.

Con relación a la providencia dictada por la Sala Primera de Decisión Laboral de este Tribunal el 16 de febrero de la corriente anualidad, dentro del proceso con radicado única nacional 05001310501520200007401, que trata acerca de un asunto similar, se resolvió revocar el auto proferido en primera instancia que había negado el decreto de la prueba, en su lugar ordenó su decreto. El sustento de la providencia se basó en que el juez está en el deber interpretar la demanda, la carga dinámica de la prueba y que se debe ahondar en garantías; sin embargo, nótese que no se hizo mención alguna a lo consagrado en el artículo 173 del Código General del Proceso, que fue el sustento del juez de primera instancia para negar el decreto de la prueba.

Además, no se puede pasar por alto la observación realizada por el mandatario judicial de la demanda, quien señaló que la información que

solicita la parte activa ya se encuentra incluida en la prueba documental aportada por las partes y que fuera decretada por la juez.

Corolario de todo lo dicho, el auto recurrido por vía de apelación merece ser **CONFIRMADO**.

Con los argumentos anteriores esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas por las partes.

Atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir adelante la apelación formulada por la demandante, las costas procesales de la segunda instancia son de su cargo y en favor de Bancolombia S.A. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$580.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocida.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 082 del 16 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>